



Nueva Chevallier S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 30 de abril de 2024

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 198/244, Nueva Chevallier S.A. promueve la acción prevista por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de La Pampa y la Dirección General de Rentas provincial, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos que le reclaman por la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros que realiza.

Sostiene que esa imposición es contraria a lo establecido en los artículos 31 y 75, incisos 2° y 13, de la Constitución Nacional, la ley 23.548 y las normas federales que regulan su actividad.

Relata que es una empresa autorizada por el Estado Nacional (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para prestar el servicio público en el territorio nacional. Como consecuencia de ello, explica que su actividad se encuentra regulada por normas federales y que las tarifas de los servicios que presta son determinadas por la mencionada autoridad nacional, de manera unilateral y de acuerdo con las escalas y bases tarifarias por esta fijadas, sin que haya contemplado en su cálculo la incidencia de la gabela que aquí se discute (decreto nacional 2407/02 y normas reglamentarias y complementarias).

Sostiene que si el impuesto sobre los ingresos brutos no forma parte del costo contemplado a los fines de la fijación de la tarifa obligatoria establecida por la autoridad nacional para los servicios que presta, no puede ninguna jurisdicción provincial pretender su cobro, ni siquiera la jurisdicción de la Provincia de La Pampa, porque su imposición afectaría la renta de la sociedad que se encuentra sometida con exclusividad a los tributos nacionales coparticipables.

Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de que la parte demandada se abstenga de dictar, iniciar, promover o proseguir con actos, acciones o conducta alguna tendientes a la fiscalización, estimación, determinación, percepción, embargo, inhibición o cobro, judicial o extrajudicial, por sí o por medio de terceros (agentes de retención, percepción y recaudación, incluido el SIRCREB), de las presuntas obligaciones de la sociedad actora relativas al impuesto sobre los ingresos brutos.

2°) Que de acuerdo a los términos de la demanda (artículos 4° y 5° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y según lo resuelto por esta Corte en las causas "Compañía Micrómnibus La Colorada S.A.C.I." (Fallos: 332:1624), "Autotransportes Andesmar S.A." (Fallos: 332:2838); CSJ 4325/2015 "Derudder Hermanos S.R.L. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y CSJ 335/2016 "Expreso Tigre Iguazú c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad", sentencias del 20 de septiembre de 2016, entre otras, este juicio corresponde a la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional.

3°) Que, con relación a la pretensión cautelar, es dable recordar que este Tribunal ha establecido que si bien, por vía de principio, medidas como la requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases *prima facie* verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702 y 314:695).

4°) Que, en ese sentido, las constancias obrantes en el expediente permiten tener por configurada la verosimilitud del derecho invocada, dado que, en el limitado marco de



Nueva Chevallier S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

conocimiento propio del instituto en examen, esos antecedentes resultan *prima facie* demostrativos de que la situación descripta en la demanda es sustancialmente análoga a la resuelta por esta Corte en los pronunciamientos correspondientes a las causas "Derudder Hnos. S.R.L." (Fallos: 335:2583) y CSJ 535/2012 (48-T)/CS1 "Transportes Automotores La Estrella S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad", sentencia del 6 de marzo de 2012, entre otros, circunstancia que el Tribunal no puede dejar de ponderar y que determina que resulte aconsejable apartarse del señalado criterio restrictivo con que deben considerarse este tipo de medidas cautelares (arg. Fallos: 329:4176; 331:2893; y causas CSJ 697/2002 (38-T)/CS1 "Transnoa S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - incidente sobre medida cautelar"; CSJ 80/2002 (38-Y)/CS1 "Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa"; CSJ 991/2004 (40-G) "Gasnor S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa de certeza -incidente de medida cautelar- IN1", pronunciamientos del 26 de noviembre de 2002, 3 de diciembre de 2002 y 9 de agosto de 2005, respectivamente).

5º) Que lo mismo debe concluirse con relación al peligro en la demora, requisito que debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros.

Ese extremo se configura en el caso en virtud de las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal cuestionada. Sobre ese particular, cabe poner de resalto que este Tribunal no puede soslayar la particular situación descripta por la parte actora -reseñada en el segundo párrafo de fs. 239 vta. y a fs. 240/241 vta.- referente a la incidencia del impuesto reclamado y a los efectos patrimoniales

que podría traer aparejada su ejecución, circunstancias contempladas expresamente por el Tribunal frente a situaciones similares (Fallos: 325:2842, y otras causas allí citadas).

6°) Que toda vez que la Dirección General de Rentas es un organismo que depende jerárquicamente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que a su vez es parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas local (decreto 619/1953), la demanda habrá de ser sustanciada con la Provincia de La Pampa.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte. II. Correr traslado de la demanda a la Provincia de La Pampa por el plazo de sesenta días (artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su notificación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor Juez Federal de la ciudad de Santa Rosa. III. Decretar la prohibición de innovar solicitada, a cuyo efecto corresponde hacer saber a la Provincia de La Pampa que deberá abstenerse de exigir a Nueva Chevallier S.A. el pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la actividad de servicio público de transporte interjurisdiccional de pasajeros (deuda determinada por resolución interna 39/2018, fs. 250/252) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones. A fin de notificar la medida dispuesta al señor Gobernador, líbrese oficio. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° y 2° del voto que encabeza el presente pronunciamiento.

3°) Que las medidas cautelares suspensivas de reclamos y cobros fiscales resultan restrictivas en atención a la presunción de validez que rige a los actos administrativos y legislativos que los sustentan (Fallos: 313:1420, considerando 8°; 322:2275 y disidencia parcial del juez Rosatti en la causa CSJ 735/2017/1 "Líneas Comahue Cuyo S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ incidente de medida cautelar", sentencia de fecha 4 de junio de 2020, considerando 7°, entre otros).

Esta Corte ha decidido -en forma reiterada- que la finalidad de las medidas precautorias consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia, y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (Fallos: 329:2949; 330:3126; 340:757, entre otros).

Incluso en casos en los que procedió la acción declarativa solicitada el Tribunal consideró que la

sustanciación del juicio podía llevarse a cabo sin impedir la percepción del impuesto pretendida, toda vez que el procedimiento reglado por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a intentar por las vías procesales que considere pertinentes (Fallos: 310:606 y disidencia parcial del juez Rosatti en la causa CSJ 4870/2015 "Chevron Argentina S.R.L. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa", sentencia del 19 de febrero de 2019).

En ese sentido, las constancias obrantes en el expediente no permiten tener por configurada la verosimilitud del derecho invocada a la luz de los precedentes de fondo que rigen la materia. En el limitado marco de conocimiento propio del instituto en examen, los antecedentes invocados por la empresa transportista no demuestran, en principio, que la situación descripta en la demanda pueda ocasionar una tributación inconstitucional.

4°) Que, por otra parte, el examen de la concurrencia del peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de evaluar si las secuelas que han de producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277).

Este requisito debe juzgarse con un juicio objetivo y no alcanza con la mera comprobación de la magnitud del *quantum* del monto requerido por el Estado provincial, si no se demuestra que la decisión provincial causa un gravamen que difícilmente podría revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión (Fallos: 323:3853; 329:3890; disidencia del juez Rosatti en la causa CSJ 115



CSJ 307/2019

ORIGINARIO

Nueva Chevallier S.A. c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

/2020 "Rovella Carranza S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", del 24 de noviembre de 2022). En ese orden, al argumentar sobre el peligro en la demora, la empresa actora no ha demostrado cómo impactaría concretamente el tributo cuestionado en su desenvolvimiento económico, ni ha explicado por qué motivo su interés no sería igualmente satisfecho si obtuviese -al finalizar el pleito- una repetición de los montos eventualmente ingresados durante el trámite del proceso.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte. II. Correr traslado de la demanda a la Provincia de La Pampa por el plazo de sesenta días (artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A los fines de su notificación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor Juez Federal de la ciudad de Santa Rosa. III. Rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

Parte actora: **Nueva Chevallier S.A.**, representada por el **doctor Román Alberto Uez**, con el patrocinio letrado de la **doctora Silvana Marcela Garrido Santos**.

Parte demandada: **Provincia de La Pampa**, no presentada en autos.